

La consulta plantea, si resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el acceso por parte del Servicio Público de Empleo Estatal a los datos fiscales y laborales no sólo de los solicitantes sino también de los miembros de la unidad familiar.

Como cuestión previa, conviene recordar que en el supuesto sometido a Informe nos encontraríamos ante una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 j) de la Ley Orgánica como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar, el previo consentimiento del interesado (artículo 11.1), otorgado con carácter previo a la cesión y suficientemente informado de la finalidad a que se destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo de actividad de aquél a quien se pretenden comunicar (artículo 11.3), y que debe recabar el cedente como responsable del fichero que contiene los datos que se pretenden ceder.

No obstante, el artículo 11.2.a) exceptúa de la obligación de recabar el consentimiento para dicha cesión aquellos supuestos en que la misma trae causa de lo establecido en una norma con rango de Ley.

Por ello, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre de Empleo, en su artículo 24 relativo al enfoque preventivo de las políticas activas de empleo, señala en su apartado segundo que “La articulación de los servicios y políticas activas en favor de los desempleados se ordenará por los servicios públicos de empleo en un itinerario de inserción laboral individualizado, en colaboración con el demandante de empleo de acuerdo con las circunstancias profesionales y personales de éste.”

En consecuencia podemos afirmar que la propia Ley 56/2006, habilita la comunicación de los datos del entorno familiar del solicitante, al Servicio Público de Empleo Estatal, para poder valorar las circunstancias concurrentes en cada caso.

A mayor abundamiento, de la documentación aportada en la consulta se desprende que en la propia solicitud del subsidio por desempleo, se exige acreditar las rentas de los miembros de la unidad familiar.

Por este motivo, la comunicación de datos de los miembros de la unidad familiar al Servicio Público de Empleo Estatal, por parte del solicitante del subsidio, encaja en lo establecido en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, que habilita la cesión de los datos de carácter personal sin precisar el consentimiento de los afectados “Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”.

En efecto, el conocimiento por parte de los solicitante de esta circunstancia supone la aceptación del hecho de que, para que la acción pueda tener lugar, se comuniquen al Servicio Público de Empleo Estatal, determinados datos que acrediten sus circunstancias personales, toda vez que, en caso contrario, el solicitante no sería beneficiado por la prestación, al no justificarse su efectiva realización y son criterios a tener en consideración para la obtención de la ayuda pública.